



# ÍNDICE

## Ley 2/2006, de 14 de junio, de Derecho Civil de Galicia

<b>PREÁMBULO</b> .....	23
<b>TÍTULO PRELIMINAR</b> .....	27
Artículos 1, 2, 3, 4 .....	27
<b>TÍTULO PRIMERO: DE LA PROTECCIÓN DE MENORES</b> .....	28
<b>Capítulo I. Disposición general</b> .....	28
Artículos 5, 6 .....	28
<b>Capítulo II. Del desamparo y la tutela administrativa</b> .....	29
<i>Sección primera. Disposición general</i> .....	29
Artículo 7 .....	29
<i>Sección segunda. De la declaración de desamparo</i> .....	29
Artículos 8, 9 .....	29
<i>Sección tercera. De las medidas de protección</i> .....	30
Artículo 10 .....	30
<b>Capítulo III. De la guarda administrativa</b> .....	31
<i>Sección primera. Disposición general</i> .....	31
Artículo 11 .....	31
<i>Sección segunda. De la guarda administrativa asumida por solicitud a la entidad pública</i> .....	31
Artículos 12, 13 .....	31
<i>Sección tercera. Del ejercicio de la guarda administrativa: el acogimiento. Disposiciones generales</i> .....	32
Artículos 14, 15 .....	32
<i>Sección cuarta. Del acogimiento familiar</i> .....	33
Artículos 16 ,17, 18, 19, 20 .....	33
<i>Sección quinta. Del acogimiento residencial</i> .....	34
Artículo 21 .....	34
<i>Sección sexta. De la constitución del acogimiento</i> .....	35
Artículos 22, 23, 24 .....	35

<i>Sección séptima. Del cese del acogimiento</i> .....	36
Artículo 25 .....	36
<b>Capítulo IV. De la situación de riesgo y las medidas de protección</b> .....	36
Artículo 26 .....	36
<b>TÍTULO II. DE LA ADOPCIÓN</b> .....	36
<b>Capítulo primero. De las personas que puedan adoptar y ser adoptadas</b> ..	36
Artículos 27, 28, 29, 30, 31 .....	36
<b>Capítulo II. De la constitución de la adopción</b> .....	37
Artículos 32, 33, 34, 35, 36, 37 .....	37
<b>Capítulo III. De la eficacia de la adopción</b> .....	39
Artículos 38, 39, 40, 41 .....	39
<b>TÍTULO III. DE LA AUTOTUTELA</b> .....	41
Artículos 42, 43, 44, 45 .....	41
<b>TÍTULO IV. DE LA SITUACIÓN DE AUSENCIA NO DECLARADA</b> .....	41
Artículos 46, 47, 48, 49, 50 .....	41
<b>TÍTULO V. DE LA CASA Y LA VECIÑA</b> .....	42
Artículos 51, 52, 53, 54, 55 .....	42
<b>TÍTULO VI. DE LOS DERECHOS REALES</b> .....	43
<b>Capítulo primero. De los montes vecinales en mano común</b> .....	43
Artículos 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63 .....	43
<b>Capítulo II. De los montes abertales</b> .....	45
Artículo 64 .....	45
<b>Capítulo III. De la comunidad en materia de aguas</b> .....	46
Artículos 65, 66, 67 .....	46
<b>Capítulo IV. De los muíños de herdeiros</b> .....	47
Artículos 68, 69, 70 .....	47
<b>Capítulo V. De las agras y los vilares</b> .....	47
Artículos 71, 72, 73, 74 .....	47
<b>Capítulo VI. De las relaciones de vecindad</b> .....	48
Artículo 75 .....	48
<b>Capítulo VII. De las serventías</b> .....	49
Artículos 76, 77, 78, 79, 80, 81 .....	49
<b>Capítulo VIII. De la servidumbre de paso</b> .....	50
<i>Sección primera. De la adquisición de la servidumbre de paso</i> .....	50
Artículos 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88 .....	50
<i>Sección segunda. De los derechos y obligaciones de los propietarios de los predios dominante y sirviente</i> .....	53
Artículos 89, 90, 91 .....	53

<i>Sección tercera. De la extinción y suspensión de la servidumbre de paso</i> . . . . .	55
Artículos 92, 93, 94 . . . . .	55
<b>Capítulo IX. Del retracto de la graciosa</b> . . . . .	56
Artículos 95, 96, 97, 98 . . . . .	56
<b>TÍTULO VII. DE LOS CONTRATOS</b> . . . . .	57
<b>Capítulo primero. De los arrendamientos rústicos</b> . . . . .	57
<i>Sección primera. Disposiciones generales</i> . . . . .	57
Artículos 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118 . . . . .	57
<i>Sección segunda. Del arrendamiento del lugar acasariado</i> . . . . .	61
Artículos 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126 . . . . .	61
<b>Capítulo II. De las aparcerías</b> . . . . .	62
Artículos 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146 . . . . .	62
<b>Capítulo III. Del vitalicio</b> . . . . .	67
Artículos 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156 . . . . .	67
<b>TÍTULO VIII. DE LA COMPAÑÍA FAMILIAR GALLEGA</b> . . . . .	69
<b>Capítulo primero. De la constitución de la compañía</b> . . . . .	69
Artículos 157, 158, 159, 160, 161, 162 . . . . .	69
<b>Capítulo II. De la administración de la compañía</b> . . . . .	70
Artículos 163, 164 . . . . .	70
<b>Capítulo III. De la modificación de la compañía</b> . . . . .	71
Artículos 165, 166, 167, 168 . . . . .	71
<b>Capítulo IV. De la extinción de la compañía</b> . . . . .	72
Artículos 169, 170 . . . . .	72
<b>TÍTULO IX. DEL RÉGIMEN ECONÓMICO FAMILIAR</b> . . . . .	73
<b>Capítulo primero. Disposiciones generales</b> . . . . .	73
Artículos 171, 172 . . . . .	73
<b>Capítulo II. De las capitulaciones matrimoniales</b> . . . . .	74
Artículos 173, 174 . . . . .	74
<b>Capítulo III. De las donaciones por razón de matrimonio</b> . . . . .	74
Artículos 175, 176, 177, 178, 179, 180 . . . . .	74
<b>TÍTULO X. DE LA SUCESIÓN POR CAUSA DE MUERTE</b> . . . . .	75
<b>Capítulo primero. Disposiciones generales</b> . . . . .	75
Artículos 181, 182 . . . . .	75
<b>Capítulo II. De los testamentos</b> . . . . .	76
<i>Sección primera. Del testamento abierto ordinario</i> . . . . .	76
Artículos 183, 184, 185, 186 . . . . .	76

<i>Sección segunda. Del testamento mancomunado</i> .....	76
Artículos 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195 .....	76
<i>Sección tercera. Del testamento por comisario</i> .....	78
Artículos 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202 .....	78
<i>Sección cuarta. De las disposiciones testamentarias especiales</i> .....	80
Artículos 203, 204, 205, 206, 207, 208 .....	80
<b>Capítulo III. De los pactos sucesorios</b> .....	81
<i>Sección primera. Disposiciones generales</i> .....	81
Artículos 209, 210, 211, 212, 213 .....	81
<i>Sección segunda. De los pactos de mejora</i> .....	82
Artículos 214, 215, 216, 217, 218 .....	82
<i>Sección tercera. De la mejora de labrar y poseer</i> .....	84
Artículos 219, 220, 221, 222, 223 .....	84
<i>Sección cuarta. De la aportación</i> .....	85
Artículos 224, 225, 226, 227 .....	85
<b>Capítulo IV. Del usufructo del cónyuge viudo</b> .....	85
Artículos 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237 .....	85
<b>Capítulo V. De las legítimas</b> .....	88
<i>Sección primera. Disposiciones generales</i> .....	88
Artículos 238, 239, 240, 241, 242 .....	88
<i>Sección segunda. De la legítima de los descendientes</i> .....	89
Artículos 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252 .....	89
<i>Sección tercera. De la legítima del cónyuge viudo</i> .....	91
Artículos 253, 254, 255, 256, 257 .....	91
<i>Sección cuarta. De la preterición y el desheredamiento</i> .....	92
Artículos 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266 .....	92
<b>Capítulo VI. De la sucesión intestada</b> .....	94
Artículos 267, 268, 269 .....	94
<b>Capítulo VII. De la partición de la herencia</b> .....	94
<i>Sección primera. Disposiciones generales</i> .....	94
Artículos 270, 271, 272 .....	94
<i>Sección segunda. De la partición por el testador</i> .....	95
Artículos 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282 .....	95
<i>Sección tercera. De la partición por el contador-partidor</i> .....	96
Artículos 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293 .....	96
<i>Sección cuarta. De la partición por los herederos</i> .....	98
Artículos 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308 .....	98

---

<b>DISPOSICIONES ADICIONALES</b> .....	101
Disposición Adicional Primera, Segunda, Tercera, Cuarta .....	101
<b>DISPOSICIONES TRANSITORIAS</b> .....	103
Disposición Transitoria Primera, Segunda, Tercera .....	103
<b>DISPOSICIÓN DEROGATORIA</b> .....	103
Disposición Derogatoria .....	103
<b>DISPOSICIÓN FINAL</b> .....	103
Disposición Final .....	103

## INTRODUCCIÓN

La actuación legislativa en materia civil ha venido desarrollándose, en los últimos años, principalmente, en el ámbito de los derechos forales o especiales.

Mientras el Código Civil permanecía prácticamente inmutable, los parlamentos autonómicos de Cataluña, País Vasco, Navarra, Aragón o Galicia, han ido aprobando normas que han sabido conjugar las particularidades de los respectivos territorios forales, con las aportaciones de la doctrina y, de manera especial, con la experiencia acumulada en la aplicación del Derecho por parte de los Tribunales de Justicia, Notarios y Registradores de la Propiedad.

De esta manera se logra, *«adaptar el marco jurídico a la realidad de hoy y satisfacer las necesidades cotidianas de los ciudadanos, que, de acuerdo con aquél, pueden ejercer plenamente su libertad en el ámbito privado»*<sup>1</sup>.

Galicia participó en este proceso de creación legislativa, iniciado en la última década del siglo xx, con la Ley 4/1995 de 24 de mayo, del Derecho Civil de Galicia, una ley con sus luces y sus sombras, sus aciertos y sus errores, pero que, en cualquier caso, supuso un avance cualitativo frente a su predecesora, la Compilación de 1963.

Este deseo de gozar de un Derecho Civil apegado a la realidad social del pueblo al que se aplica, no era, sin embargo, ajeno a los padres del Código Civil de 1889, que establecieron en su Disposición Adicional Tercera un sistema de revisión decenal, el cual, pese a su buena intención, caería pronto en el olvido.

Tampoco tuvo mucho éxito la norma que, en un sentido similar, contemplaba la Compilación de 1963 y que se reproduciría, a su vez, en la Disposición Adicional segunda de la propia Ley 4/1995, al establecer que *«Cada cinco años, como máximo, sin perjuicio de la iniciativa parlamentaria correspondiente, la Mesa del Parlamento de Galicia designará una ponencia, integrada por miembros de los diversos grupos parlamentarios de la Cámara, a fin de elaborar un informe comprensivo de las dificultades y dudas que se adviertan en la aplicación de los preceptos de la presente Ley y de aquellas normas que se estimen necesarias para la conservación, modificación y desarrollo de las instituciones del derecho civil propio de Galicia»*. Con esta norma se pretendía dejar la puerta abierta a la futura incorporación al derecho positivo gallego de todas aquellas *«instituciones que la ley no regula y que tienen méritos propios para ser incorporadas al derecho escrito de Galicia»*<sup>2</sup>, sin vulnerar los conocidos límites de la *conservación, modificación y desarrollo*, que establece el artículo 149.1.8º de la Constitución de 1978.

---

<sup>1</sup> Preámbulo de la Ley 5/2006, de 10 de mayo, del Libro Quinto del Código civil de Cataluña, relativo a derechos reales.

<sup>2</sup> E. de M. Ley 4/1995.

De cualquier forma, debe reconocerse que una reforma en profundidad de la Ley, requería previamente dejarla “vivir en paz”, a fin de permitir «su encarnación en la realidad jurídica gallega»<sup>3</sup>.

Esto último no tardaría mucho en producirse, habida cuenta de que la ley de 1995, en tanto que Derecho civil común del territorio foral de Galicia, constituía la herramienta de primer orden de que disponían los juristas gallegos a la hora de afrontar las cuestiones que, en el ámbito del Derecho privado, se planteaban en la práctica diaria; lo que quedó plasmado en numerosos pronunciamientos judiciales, tanto en la jurisprudencia menor, o de la Audiencias Provinciales, como en la del propio Tribunal Superior de Justicia.

Los primeros años de vigencia de la Ley sirvieron para poner de manifiesto la brecha existente, dentro del articulado, entre una serie de preceptos de frecuente aplicación, necesitados de una regulación más amplia que aclarase las dudas que se planteaban en la práctica, y otros de carácter cuasi anecdótico, cuya eliminación del texto legal apenas sería perceptible. Entre los primeros, se encuentran sin duda los preceptos referentes al régimen sucesorio; entre los segundos se hallarían aquellos que regulan instituciones de origen consuetudinario, de dudosa subsistencia, como es el caso del retracto de graciosa, o la compañía familiar gallega<sup>4</sup>.

Ya fuese por la necesidad de acumular experiencia, o ya fuese por el poco interés demostrado por el legislador de turno, lo cierto es que hubo que esperar al transcurso de los cinco años que señalaba la Disposición Adicional Segunda para observar movimientos en el ámbito de la administración autonómica, encaminados al estudio de una posible reforma de la ley.

Nos referimos a la activación, por medio del Decreto 107/1999, de 8 de abril, de un órgano consultivo que había sido creado previamente, en el año 1984, bajo el nombre de “Comisión superior para o estudo do desenvolvemento do dereito galego”. Fruto de los trabajos de esta comisión, surgirá en abril de 2001, el proyecto que, tras la tramitación parlamentaria, terminaría cristalizando en la vigente Ley 2/2006, de 14 de junio.

La actual Ley del Derecho Civil de Galicia, amplía considerablemente la extensión de su predecesora, la Ley de 24 de mayo de 1995, pasando de 170 a 308 artículos, repartidos en un título preliminar y diez títulos más, que tratarían, respectivamente, de la protección de menores, de la adopción, de la autotutela, de la situación de ausencia no declarada, de la casa y la veciña, de los derechos reales, de los contratos, de la compañía familiar gallega, del régimen económico familiar y de la sucesión por causa de muerte. Completan la Ley cuatro disposiciones adicionales, tres transitorias, una disposición derogatoria y una final.

Una lectura rápida de la Ley nos revela la primera de sus características: ninguna de las instituciones reguladas en la Ley de 1995 aparece aquí suprimida, pese a las críticas, formuladas por la doctrina a algunos de sus preceptos, de carácter meramente testimonial, por regular figuras que aparecen como «*meros vestigios del pasado*», que no se hallarían «*acordes con los tiempos que corren*»<sup>5</sup>.

<sup>3</sup> Intervención de Sánchez Mera en el acto de presentación del libro *Derecho de sucesiones de Galicia*, publicada en el Libro Homenaje del Consejo General del Notariado del año 2002.

<sup>4</sup> Lo que no obsta para que hayan sido invocados ante los tribunales de justicia, en alguna que otra ocasión, sin que éstos hayan encontrado reparos a su aplicación, pues “ancha es Castilla”, *rectius*, Galicia.

<sup>5</sup> Cfr. Ramón P. RODRÍGUEZ MONTERO, «El derecho civil en Galicia. La ley derecho civil de Galicia y el futuro derecho civil de Galicia: apuntes, ideas y sugerencias», *Anuario da Facultade de Dereito da Universidade da Coruña*, Fascículo nº 5-2004.



Se podrá alegar a favor de la *conservación* de dichas instituciones, el hecho de que el Tribunal Superior de Justicia, a lo largo de estos años, no ha sido absolutamente ajeno a estas figuras, invocando, en ocasiones, los preceptos que las regulan. Con todo, no me parece que sea un argumento definitivo, y en este mismo sentido cabría alegar que, quien quiera buscar jurisprudencia sobre la enfiteusis, los foros o el derecho a las primeras cepas, podría encontrarla sin problemas, y sin embargo el Código Civil podría perfectamente simplificar la regulación que les dedica, sin que nada pasase. Piénsese por ejemplo en la supresión del testamento sacramental y algunas otras instituciones, por parte del Código de sucesiones de Cataluña en 1991, figuras con una larga tradición en el pasado, pero hoy en día alejadas de la realidad cotidiana.

En cuanto a las instituciones reguladas *ex novo*, la Ley se ocupa en sus títulos I, II y III, de la de la protección de menores, la adopción y la autotutela, respectivamente; figuras todas ellas que constituyen una novedad con respecto a la Ley de 1995. La lectura de estos preceptos debe hacerse más en clave política, que en la propiamente técnico-jurídica, habida cuenta de que la regulación contenida en ellos apenas introduce diferencias con respecto al Derecho común. Lo verdaderamente novedoso de los títulos citados, que era sin duda la regulación de la autotutela que el Proyecto aprobado en el año 2001, contemplaba en términos similares a los del Derecho catalán, finalmente no sería tal, al adelantarse a su aprobación la Ley 41/2003 de 18 de noviembre, que reformaría el Código Civil. Dicha Ley vino a regular expresamente la figura de la autotutela en Derecho común, privando en gran parte de sentido a la regulación de la Ley gallega. A pesar de ello, al seguir adelante la tramitación del Proyecto de Ley sin retocar los preceptos que se dedicaban a esta materia, nos encontramos con la paradoja de que en Galicia no existe una regulación específica de la tutela, aunque sí de la autotutela, que por otro lado nada aporta con respecto al Código Civil.

Al margen del acierto de los artículos que se incorporan al texto legal, la regulación de materias antes no contempladas puede encuadrarse en la aspiración de gozar de un Derecho privado propio de Galicia, con vocación expansiva, que evite tener que operar con una dualidad de textos legales. De cualquier modo, como suele ocurrir, la regulación de nuevas materias por parte de las Comunidades Autónomas con Derecho Civil Foral o Especial, suscita la duda de su constitucionalidad, al ser confrontadas con los límites antes citados del artículo 149.1.8º del texto del 78, según la interpretación que ha venido efectuando el Tribunal Constitucional. En el caso de los preceptos que comentamos, el deseo de evitar el recurso de inconstitucionalidad, motivaría el que se constituyese, al amparo del artículo 33.2 de la LO 3/1979 del Tribunal Constitucional, la Comisión Bilateral de Cooperación Administración General del Estado-Comunidad Autónoma de Galicia, la cual en su reunión celebrada el día 18 de septiembre de 2006, adoptaría el acuerdo de iniciar negociaciones para resolver las discrepancias que, sobre los artículos relativos a la adopción y la autotutela, se habían puesto de manifiesto entre ambas administraciones<sup>6</sup>.

En cuanto a las instituciones que ya figuraban reguladas en la ley de 1995, la nueva ley se ha ocupado de depurar algunos de los errores más evidentes que se habían puesto de manifiesto, como la incomprensible repetición de los artículos 134 y 135 (idénticos a los artículos 155 y 156), o la desacertada ubicación sistemática de determinadas figuras.

<sup>6</sup> Resolución de 19 de septiembre de 2006, publicada en el *BOE* el 27 de septiembre de 2006.

Al mismo tiempo la ley ha venido a ampliar y aclarar la regulación de su predecesora, especialmente en las materias más necesitadas de ello, a saber, aquellas en las que la regulación, por ser diferente a la del Derecho común, no puede integrarse acudiendo a los preceptos del Código Civil. En este sentido son muchos los aspectos que merecerían ser analizados (p.ej. la más cuidada regulación de la ausencia no declarada, las servidumbres, el vitalicio<sup>7</sup>, la liquidación parcial de la sociedad conyugal o los pactos sucesorios), algo de lo que sin duda se encargará tanto la Jurisprudencia —pues los tribunales ya vienen aplicando la ley desde el pasado 19 de julio— como la Doctrina —me consta la existencia de iniciativas en este sentido—.

Merece la pena detenerse en, al menos, tres aspectos novedosos de la Ley 2/2006, que llaman poderosamente la atención por el cambio radical que introducen frente a la situación anterior a la misma.

En primer lugar, los artículos que nos encontramos al comenzar a leer la ley, en su título preliminar, nos ponen sobre aviso de la voluntad reformadora del legislador, al abandonar la primacía de la costumbre frente al derecho positivo, que tradicionalmente había caracterizado al Derecho Foral de Galicia. Sin dejar de reconocer el origen eminentemente consuetudinario de la mayoría de las instituciones de nuestro Derecho Foral, un derecho que mire hacia el futuro debe abandonar la dependencia de la costumbre, que requiere de la prueba como presupuesto previo a su aplicación. La Ley de 14 de junio, en la redacción dada al título preliminar, que tiene su origen en una enmienda del Grupo Parlamentario Socialista, vino a hacerse eco de las críticas que había formulado la doctrina, reestructurando el sistema de fuentes, lo que sin duda es un acierto desde el punto de vista de la Seguridad Jurídica, permitiendo además «*darle al Parlamento de Galicia todo el protagonismo de creación normativa, como órgano en el que reside la potestad legislativa como expresión de la voluntad del pueblo*»<sup>8</sup>.

La segunda gran innovación de la Ley se sitúa en el campo del Derecho sucesorio, y es sin duda la reforma del sistema de legítimas. Nuevamente la ley recoge el sentir mayoritario de la Doctrina moderna, plasmado también en otras leyes forales recientes<sup>9</sup>, que ha defendido la reducción la cuantía legitimaria y la correlativa ampliación del ámbito de disponibilidad del testador, frente a las ataduras de la tradicional legítima “pars bonorum”, de dos terceras partes de la herencia, que el Código Civil reconoce a los descendientes.

La regulación de 1995, si bien configuraba la legítima de modo poco claro<sup>10</sup>, evidenciaba ya el deseo de potenciar la libertad dispositiva, al regular las apartaciones, el usufructo voluntario de viudedad o la posibilidad de pagar la legítima de ambos cónyuges con los bienes de uno solo de ellos.

La ley actual va más allá, al modificar tanto la cuantía de la legítima como su naturaleza. En cuanto a su cuantía, el artículo 243 la fija en la cuarta parte del valor del haber hereditario líquido, respecto de los descendientes, mientras que el artículo 253, en relación

<sup>7</sup> Regulación esta última, por cierto, en la que la Ley de 1995 se adelantó al legislador estatal, que actualmente contempla esta figura, bajo el epígrafe «del contrato de alimentos», en los artículos 1791 y ss. del Código Civil en la redacción dada por la Ley 41/2003.

<sup>8</sup> Redacción propuesta por el G.P. Socialista, en su enmienda nº 81, para el párrafo IV de la E. de M., que finalmente no sería aprobada.

<sup>9</sup> *Vid.*, en este sentido, la Ley 1/1999, de 24 de febrero, de Sucesiones por Causa de Muerte de Aragón.

<sup>10</sup> El antiguo artículo 146 la definía como «*la cuota de activo líquido que necesariamente corresponde a determinados parientes del causante de una sucesión y al cónyuge viudo de éste, salvo en los casos de apartación regulados en esta Ley*».

con el cónyuge viudo, le atribuye a éste «*el usufructo vitalicio de una cuarta parte del haber hereditario*». No serán legitimarios, en adelante, los ascendientes. Esto último contrasta, sin embargo, con el llamamiento abintestato de dichos ascendientes, en defecto de ascendientes y con preferencia al cónyuge viudo. Se trata de una contradicción fruto del empleo del sistema de remisión al Código Civil, en los preceptos que contemplan la sucesión intestada. La consecuencia de todo ello será que, a pesar de que el cónyuge viudo del fallecido es legitimario y sus padres no lo son, en el caso de que aquél muriese sin haber realizado testamento, la posición que ocuparán sus padres en la herencia, será de mejor condición que la de aquél que contribuyó con sus ingresos a la adquisición del que, en la mayoría de los casos será el principal activo hereditario: la vivienda habitual. Por otro lado, el abandono del tradicional sistema de legítima de dos tercios, hace que desaparezca en Galicia el “tercio de mejora”, por más que la ley siga hablando ahora de “pactos de mejora” o de “mejora de labrar y poseer”, aunque reducidos a meros pactos sucesorios (tal y como sugiere su actual ubicación sistemática), planteándose la duda de si cabrá, al amparo de estos artículos “mejorar”, a los descendientes de grado ulterior, cuando no sean legitimarios.

Pero la modificación del régimen de legítimas no se limita, como señalábamos antes, a la mera reducción de su cuantía, sino que es más profunda, al afectar a la propia naturaleza de la figura. En la actual ley gallega, el legitimario pasa a ser un mero acreedor del heredero, que no tiene acción real para reclamar su legítima (art.249) sino tan sólo el derecho a recibir del causante, por cualquier título, una atribución patrimonial, en la forma y medida que establece la ley (art.240).

La consecuencia inmediata que se desprende de los artículos citados, que empezamos a notar ya en los despachos notariales, sería la de una mayor agilidad, evitando la situación de bloqueo que se producía en el sistema anterior cuando uno de los legitimarios se negaba a firmar la partición de la herencia. El incremento de las facultades dispositivas del testador, confiere una importancia decisiva al testamento, en el que el testador encuentra ahora más fácil dejar a los suyos lo que realmente quiere, y no lo que la ley anterior le obligaba a dejar. De este modo va abriéndose camino el tradicional testamento “*d'un per a l'altre*” del Derecho catalán. Con todo, urge una modificación del Impuesto de Sucesiones, que complete la reforma operada en el Derecho Sustantivo, equiparando a Galicia con las otras comunidades autónomas.

En tercer y último lugar, es obligada la mención a la disposición adicional tercera de la Ley, que a día de hoy es, sin duda, su norma más polémica.

Señala esta disposición que «*A los efectos de aplicación de la presente ley se equiparan al matrimonio las relaciones maritales mantenidas con intención o vocación de permanencia, con lo cual se extienden, por tanto, a los miembros de la pareja los derechos y obligaciones que esta ley reconoce a los cónyuges.*

*Tendrá la consideración de relación marital análoga al matrimonio la formada por dos personas que lleven conviviendo al menos un año, pudiéndose acreditar tal circunstancia por medio de la inscripción en el registro, manifestación expresa mediante acta de notoriedad o cualquier otro medio admisible en derecho. En caso de tener hijos en común será suficiente con acreditar la convivencia».*

Para comprender la norma, tal vez sea preciso hacer referencia a su proceso de gestación. El texto aprobado por la Comisión superior para el estudio del desenvolvimiento del derecho galego, en Abril de 2001, no incluía en su articulado, mención alguna a las uniones de hecho. El Grupo Parlamentario del Bloque Nacionalista Gallego, en la anterior legislatura, cuando se hallaba en la oposición, llegó a presentar una proposición de ley so-

bre las uniones de hecho en Galicia, admitida a trámite por la mesa del Parlamento, el 10 de Junio de 2002, aunque finalmente la iniciativa no prosperaría<sup>11</sup>.

Las primeras referencias a las uniones de hecho nos las encontramos en las enmiendas presentadas a la Proposición de ley por los tres principales partidos con representación parlamentaria. Las tres opciones de regulación, no eran sin embargo coincidentes. Así, mientras que los socialistas proponían su regulación dentro del articulado, mediante la introducción de un artículo 51 bis, en un capítulo nuevo, dedicado a la familia, el Bloque Nacionalista Galego optaba por hacer referencia expresa a las parejas de hecho en aquellos preceptos en los que se aludía a los cónyuges, al tiempo que, como alternativa a lo anterior, proponía una norma general de equiparación al matrimonio, en sede de disposiciones adicionales. Esta última era también la técnica propuesta por el Grupo Parlamentario Popular, que en su enmienda<sup>12</sup> contemplaba la extensión de los derechos y obligaciones de los cónyuges a los miembros de la parejas de hecho, mediante la introducción de una disposición adicional tercera, aunque con la importante matización de que deberían figurar inscritas en el correspondiente registro, cuya creación se proponía en el apartado segundo de la misma disposición. Finalmente, el partido popular retiraría su enmienda por congruencia con la presentada por el Bloque Nacionalista, por lo que las uniones de hecho quedarían reguladas en la actual disposición adicional tercera, que reproduce casi literalmente la propuesta de este último partido. De esta manera triunfaría la menos técnica de las tres normas propuestas, un precepto que plantea más dudas de las que resuelve, y que no tiene parangón en ninguna de las legislaciones autonómicas preexistentes.

La equiparación plena entre uniones de hecho y matrimonio, que podía tener cierta justificación en el supuesto de las uniones homosexuales, cuando éstas no podían tener acceso al matrimonio, en la actualidad, tras la reforma del Código Civil operada por la Ley 13/2005, de 1 de julio, ha perdido gran parte de su significado. Esta equiparación, en la práctica, implica extender los efectos del matrimonio a quienes libre y voluntariamente han decidido no someterse a su régimen. Mientras que en la situación precedente, aquellos que conviviendo como pareja de hecho deseaban participar de alguno de los efectos del matrimonio, podían plasmar su voluntad en un convenio regulador, ahora en cambio, se verán obligados a otorgar capitulaciones todos aquellos que deseen escapar de dichos efectos.

Ahora bien, independientemente del mayor o menor acierto u oportunidad de la norma, lo cierto es que los gallegos tenemos que convivir con ella, de ahí que nos planteemos los dos presupuestos de que se hace depender su aplicación: qué se entiende por pareja de hecho en la ley vigente, y cuáles son los supuestos en los que opera la equiparación, o dicho de otra manera, cómo debe entenderse la expresión «a los efectos de aplicación de la presente ley».

En cuanto a la primera cuestión, la ley establece las tres notas que caracterizan las uniones de hecho:

1º.- La intención o vocación de permanencia.

2º.- La existencia de dos personas (evidentemente cualquiera que fuese su sexo<sup>13</sup>).

3º.- La convivencia durante al menos un año, salvo que existiese descendencia en común, en cuyo caso basta con la mera convivencia, sin plazo.

<sup>11</sup> Publicada en el *DOGA* de 15 de junio de 2002.

<sup>12</sup> La única presentada por este partido a la ley.

<sup>13</sup> *Vid* D.AD. 4ª.

Se pasa por alto, sin embargo, una cuestión trascendental, como es la de saber si podrán constituir parejas de hecho, quienes estén afectados por los impedimentos para contraer matrimonio. La omisión es más notoria, si cabe, por cuanto que se trata de una cuestión que no era ajena al Proyecto de Ley del 2002 ni a la enmienda presentada por el Partido Popular. En cualquier caso, esto último puede revelarnos la intención del legislador. A la misma solución nos conduce una interpretación teleológica de la norma, que trate de evitar aquellos resultados absurdos, como ocurriría si se permite que una persona cuyo vínculo matrimonial no se ha extinguido, pase a formar pareja de hecho —equiparada *ex lege* al matrimonio— con otra, lo que prácticamente sería abrir la puerta a la bigamia. En definitiva, la equiparación de las uniones de hecho al matrimonio opera aquí en sentido inverso, de modo que donde no puede haber matrimonio, no puede tampoco haber equiparación de sus efectos, o dicho de otra manera, una supuesta pareja de hecho no puede participar de los efectos del matrimonio, cuando éste, como tal, no puede llegar a nacer por existir un impedimento matrimonial. Puede que por este camino hallamos encontrado las que en la actualidad serían las verdaderas parejas de hecho: las que no reúnen los requisitos para que se les aplique la norma de la disposición adicional tercera (p.ej., las que llevan conviviendo menos de un año, o aquellas en las que uno de los miembros de la pareja está separado de hecho, o incluso judicialmente); sólo en estos casos, la opción de los convivientes de mantenerse al margen del derecho matrimonial será respetada, en todos los demás la expresión pareja “de hecho”, no les hará justicia.

En cuanto a la segunda cuestión que antes planteábamos, los supuestos en que opera la equiparación, hay que aclarar que la expresión «*A los efectos de aplicación de la presente ley*», restringe el ámbito de la norma comentada, pues sabido es que la Ley 2/2006, además de ceñirse al ámbito del Derecho civil, no es un texto completo ni autónomo, sino que se limita a regular aquellas materias en las que existirían peculiaridades dentro de nuestro Derecho Foral. La duda se suscita en las materias no reguladas expresamente en la ley pero sí mencionadas en ella, que se remite en cuanto a su regulación al Código Civil.

El caso paradigmático es el del régimen económico “matrimonial” de las uniones de hecho. La ley gallega no regula expresamente los regímenes económico matrimoniales, si bien determina en su artículo 171 que el régimen legal supletorio, en defecto de pacto de “*los cónyuges*”, será la sociedad de gananciales ¿significa esto que las uniones de hecho en Galicia estarán sujetas a gananciales? Lo cierto es que el tenor literal de la ley no da muchas opciones para sostener lo contrario.

En la práctica, una vez más, lo más aconsejable será la clarificación de la situación patrimonial de la pareja, por vía capitular, para poder salir de este “embrollo” en que nos ha metido la ley.

A modo de conclusión, debo señalar que esta ley 2/2006, de DERECHO CIVIL DE GALICIA, que todos los notarios gallegos tenemos sobre la mesa de nuestros despachos, desde que se publicase en el *DOGA* el día 29 de junio de 2006, es en la actualidad objeto de estudios y debates, que señalarán las pautas de su aplicación en los años venideros, llenándose de glosas, notas marginales y subrayados. Por todo ello, es de agradecer que la revista *LA NOTARIA* se haya acordado de nosotros, poniendo a nuestra disposición este instrumento, que a todos los que, sin desdeñar las ventajas de las bases de datos, gustamos de comentar el precepto con el cliente, “a pie de campo”, nos será de gran utilidad.

A Coruña, Diciembre de 2006  
Gonzalo FREIRE BARRAL



# ÍNDICE

## Lei 2/2006 do 14 de Xuño, do Dereito Civil de Galicia

<b>PREÁMBULO</b> .....	23
<b>TÍTULO PRELIMINAR</b> .....	27
Artigos 1, 2, 3, 4 .....	27
<b>TÍTULO PRIMEIRO. DA PROTECCIÓN DE MENORES</b> .....	28
<b>Capítulo primeiro. Disposición xeral</b> .....	28
Artigos 5, 6 .....	28
<b>Capítulo II. Do desamparo e da tutela administrativa</b> .....	29
<i>Sección primeira. Disposición xeral</i> .....	29
Artigo 7 .....	29
<i>Sección segunda. Da declaración de desamparo</i> .....	29
Artigos 8, 9 .....	29
<i>Sección terceira. Das medidas de protección</i> .....	30
Artigo 10 .....	30
<b>Capítulo III. Da garda administrativa</b> .....	31
<i>Sección primeira. Disposición xeral</i> .....	31
Artigo 11 .....	31
<i>Sección segunda. Da garda administrativa asumida por solicitude á entidade pública</i> .....	31
Artigos 12, 13 .....	31
<i>Sección terceira. Do exercicio da garda administrativa: o acollemento.</i>	
<i>Disposicións xerais</i> .....	32
Artigos 14, 15 .....	32
<i>Sección Cuarta. Do acollemento familiar</i> .....	33
Artigos 16, 17, 18, 19, 20 .....	33
<i>Sección quinta. Do acollemento residencial</i> .....	34
Artigo 21 .....	34
<i>Sección sexta. Da constitución do acollemento</i> .....	34
Artigos 22, 23, 24 .....	34

<i>Sección sétima. Do cesamento do acollemento</i> .....	35
Artigo 25 .....	35
<b>Capítulo IV. Da situación de risco e das medidas de protección</b> .....	36
Artigo 26 .....	36
<b>TÍTULO II. DA ADOPCIÓN</b> .....	36
<b>Capítulo primeiro. Das persoas que poidan adoptar e ser adoptadas</b> .....	36
Artigos 27, 28, 29, 30, 31 .....	36
<b>Capítulo II. Da constitución da adopción</b> .....	37
Artigos 32, 33, 34, 35, 36, 37 .....	37
<b>Capítulo III. Da eficacia da adopción</b> .....	39
Artigos 38, 39, 40, 41 .....	39
<b>TÍTULO III. DA AUTOTUTELA</b> .....	40
Artigos 42, 43, 44, 45 .....	40
<b>TÍTULO IV. DA SITUACIÓN DE AUSENCIA NON DECLARADA</b> .....	41
Artigos 46, 47, 48, 49, 50 .....	41
<b>TÍTULO V. DA CASA E DA VECIÑA</b> .....	42
Artigos 51, 52, 53, 54, 55 .....	42
<b>TÍTULO VI. DOS DEREITOS REAIS</b> .....	43
<b>Capítulo primeiro. Dos montes veciñais en man común</b> .....	43
Artigos 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63 .....	43
<b>Capítulo II. Dos montes abertais</b> .....	45
Artigo 64 .....	45
<b>Capítulo III. Da comunidade en materia de augas</b> .....	45
Artigos 65, 66, 67 .....	45
<b>Capítulo IV. Dos muíños de herdeiros</b> .....	46
Artigos 68, 69, 70 .....	46
<b>Capítulo V. Das agras e dos vilares</b> .....	47
Artigos 71, 72, 73, 74 .....	47
<b>Capítulo VI. Das relacións de veciñanza</b> .....	48
Artigo 75 .....	48
<b>Capítulo VII. Das serventías</b> .....	48
Artigos 76, 77, 78, 79, 80, 81 .....	48
<b>Capítulo VIII. Da servidume de paso</b> .....	50
<i>Sección Primeira. Da adquisición da servidume de paso</i> .....	50
Artigos 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88 .....	50
<i>Sección segunda. Dos dereitos e das obrigas dos propietarios dos predios dominante e servente</i> .....	53
Artigos 89, 90, 91 .....	53



<i>Sección terceira. Da extinción e suspensión da servidume de paso</i> .....	54
Artigos 92, 93, 94 .....	54
<b>Capítulo IX. Do retracto da graciosa</b> .....	55
Artigos 95, 96, 97, 98 .....	55
<b>TÍTULO VII. DOS CONTRATOS</b> .....	56
<b>Capítulo primeiro. Dos arrendamentos rústicos</b> .....	56
<i>Sección primeira. Disposicións xerais</i> .....	56
Artigos 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118 .....	56
<i>Sección segunda. Do arrendamento do lugar acasurado</i> .....	60
Artigos 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126 .....	60
<b>Capítulo II. Das parzarías</b> .....	62
Artigos 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146 .....	62
<b>Capítulo III. Do vitalicio</b> .....	66
Artigos 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156 .....	66
<b>TÍTULO VIII. DA COMPAÑÍA FAMILIAR GALEGA</b> .....	68
<b>Capítulo primeiro. Da constitución da compañía</b> .....	68
Artigos 157, 158, 159, 160, 161, 162 .....	68
<b>Capítulo II. Da administración da compañía</b> .....	69
Artigos 163, 164 .....	69
<b>Capítulo III. Da modificación da compañía</b> .....	70
Artigos 165, 166, 167, 168 .....	70
<b>Capítulo IV. Da extinción da compañía</b> .....	71
Artigos 169, 170 .....	71
<b>TÍTULO IX. DO RÉXIME ECONÓMICO FAMILIAR</b> .....	72
<b>Capítulo Primeiro. Disposicións xerais</b> .....	72
Artigos 171, 172 .....	72
<b>Capítulo II. Das capitulacións matrimoniais</b> .....	72
Artigos 173, 174 .....	72
<b>Capítulo III. Das doazóns por razón de matrimonio</b> .....	73
Artigos 175, 176, 177, 178, 179, 180 .....	73
<b>TÍTULO X. DA SUCESIÓN POR CAUSA DE MORTE</b> .....	74
<b>Capítulo primeiro. Disposicións xerais</b> .....	74
Artigos 181, 182 .....	74
<b>Capítulo II. Dos testamentos</b> .....	74
<i>Sección primeira. Do testamento aberto ordinario</i> .....	74
Artigos 183, 184, 185, 186 .....	74

<i>Sección segunda. Do testamento mancomunado</i> .....	75
Artigos 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195 .....	75
<i>Sección terceira. Do testamento por comisario</i> .....	77
Artigos 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202 .....	77
<i>Sección cuarta. Das disposicións testamentarias especiais</i> .....	79
Artigos 203, 204, 205, 206, 207, 208 .....	79
<b>Capítulo III. Dos pactos sucesorios</b> .....	80
<i>Sección primeira. Disposicións xerais</i> .....	80
Artigos 209, 210, 211, 212, 213 .....	80
<i>Sección segunda. Dos pactos de mellora</i> .....	81
Artigos 214, 215, 216, 217, 218 .....	81
<i>Sección terceira. Da mellora de labrar e posuír</i> .....	82
Artigos 219, 220, 221, 222, 223 .....	82
<i>Sección cuarta. Do apartamento</i> .....	83
Artigos 224, 225, 226, 227 .....	83
<b>Capítulo IV. Do usufruto do cónxuxe viúvo</b> .....	84
Artigos 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237 .....	84
<b>Capítulo V. Das lexítimas</b> .....	86
<i>Sección primeira. Disposicións xerais</i> .....	86
Artigos 238, 239, 240, 241, 242 .....	86
<i>Sección segunda. Da lexítima dos descendentes</i> .....	87
Artigos 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252 .....	87
<i>Sección terceira. Da lexítima do cónxuxe viúvo</i> .....	90
Artigos 253, 254, 255, 256, 257 .....	90
<i>Sección cuarta. Da preterición e do desherdamento</i> .....	90
Artigos 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266 .....	90
<b>Capítulo VI. Da sucesión intestada</b> .....	92
Artigos 267, 268, 269 .....	92
<b>Capítulo VII. Da partición da herdanza</b> .....	93
<i>Sección primeira. Disposicións xerais</i> .....	93
Artigos 270, 271, 272 .....	93
<i>Sección segunda. Da partición polo testador</i> .....	93
Artigos 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282 .....	93
<i>Sección terceira. Da partición polo contador-partidor</i> .....	95
Artigos 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293 .....	95
<i>Sección cuarta. Da partición polos herdeiros</i> .....	97
Artigos 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308 .....	97

---

<b>DISPOSICIONS ADICIONAIS</b> .....	100
Disposición Adicional Primeira, Segunda, Terceira, Cuarta .....	100
<b>DISPOSICIONS TRANSITORIAS</b> .....	101
Disposición Transitoria Primeira, Segunda, Terceira .....	101
<b>DISPOSICION DERROGATORIA</b> .....	101
Disposición Derrogatoria Única .....	101
<b>DISPOSICIÓN DERRADEIRA</b> .....	102
Disposición Derradeira Única .....	102

## INTRODUCCIÓN

A actuación legislativa en materia civil veu desenvolvéndose, nos últimos anos, principalmente, no ámbito dos dereitos forais ou especiais.

Mentres o Código Civil permanecía practicamente inmutable, os parlamentos autonómicos de Cataluña, País Vasco, Navarra, Aragón ou Galicia, foron aprobando normas que souberon conxugar as particularidades dos respectivos territorios forais, coas achegas da doutrina e, de xeito especial, coa experiencia acumulada na aplicación do Dereito por parte dos Tribunais de Xustiza, Notarios e Rexistradores da Propiedade.

Deste xeito lógrase, «*adaptar o marco xurídico á realidade de hoxe e satisfacer as necesidades cotiás dos cidadáns, que, de acordo con aquel, poden exercer plenamente a súa liberdade no ámbito privado*»<sup>1</sup>.

Galicia participou neste proceso de creación legislativa, iniciado na última década do século xx, coa Lei 4/1995 do 24 de Maio, do Dereito Civil de Galicia, unha lei coas súas luces e as súas sombras, os seus acertos e os seus erros, pero que, en calquera caso, supuxo un avance cualitativo fronte á súa predecesora, a Compilación de 1963.

Este desexo de gozar dun Dereito Civil apegado á realidade social do pobo ao que se aplica, non era, non obstante, alleo aos pais do Código Civil de 1889, que estableceron na súa Disposición Adicional Terceira un sistema de revisión decenal, o cal, malia a súa boa intención, caería pronto no esquecemento.

Tampouco tivo moito éxito a norma que, nun sentido similar, contemplaba a Compilación de 1963 e que se reproduciría, á súa vez, na Disposición Adicional segunda da propia Lei 4/1995, a establecer que «*Cada cinco anos, como máximo, sen prexuízo da iniciativa parlamentaria correspondente, a Mesa do Parlamento de Galicia designará unha Ponencia, integrada por membros dos diversos grupos parlamentarios da Cámara, co fin de elaborar un informe comprensivo das dificultades e dúbidas que se advirtan na aplicación dos preceptos da presente lei e daquelas normas que se estimen necesarias para conservación, modificación e desenvolvemento das institucións do dereito civil propio de Galicia*». Con esta norma pretendíase deixar a porta aberta á futura incorporación ao dereito positivo galego de todas aquelas «institucións que a lei non regula e que teñen méritos propios para ser incorporadas ao dereito escrito de Galicia»<sup>2</sup>, sen vulnerar os coñecidos límites da *conservación, modificación e desenvolvemento*, que establece o artigo 149.1.8º da Constitución de 1978.

---

<sup>1</sup> Preámbulo da Lei 5/2006, de 10 de maio, do Libro Quinto do Código civil de Cataluña, relativo a dereitos reais.

<sup>2</sup> E. de M. Lei 4/1995

De calquera forma, debe recoñecerse que unha reforma en profundidade da Lei, requiría previamente deixala “vivir en paz”, co fin de permitir «a súa encarnación na realidade xurídica galega»<sup>3</sup>.

Isto último non tardaría moito en producirse, tendo en conta que a lei de 1995, en tanto que dereito civil común do territorio foral de Galicia, constituía a ferramenta de primeira orde de que dispoñían os xuristas galegos á hora de afrontar as cuestións que, no ámbito do dereito privado, se formulaban na práctica diaria; o que quedou plasmado en numerosos pronunciamentos xudiciais, tanto na xurisprudencia menor, ou das Audiencias Provinciais, como na do propio Tribunal Superior de Xustiza.

Os primeiros anos de vixencia da Lei serviron para poñer de manifesto a brecha existente, dentro do articulado, entre unha serie de preceptos de frecuente aplicación, necesitados dunha regulación máis ampla que aclarase as dúbidas que se formulaban na práctica, e outros de carácter cuasi anecdótico, nos que a súa eliminación do texto legal apenas sería perceptible. Entre os primeiros, atópanse sen dúbida os preceptos referentes ao réxime sucesorio; entre os segundos acharíanse aqueles que regulan institucións de orixe consuetudinaria, de dubidosa subsistencia, como é o caso do retracto de graciosa, ou a compañía familiar galega<sup>4</sup>.

Xa fose pola necesidade de acumular experiencia, ou xa fose polo pouco interese amosado polo lexislador correspondente, o certo é que houbo que esperar ao transcurso dos cinco anos que sinalaba a Disposición Adicional Segunda para observar movementos no ámbito da administración autonómica, encamiñados ao estudo dunha posible reforma da lei.

Referímonos á activación, por medio do Decreto 107/1999, do 8 de Abril, dun órgano consultivo que fora creado previamente, no ano 1984, baixo o nome de “Comisión superior para o estudo do desenvolvemento do dereito galego”. Froito dos traballos desta comisión, xurdirá en Abril de 2001, o proxecto que, tras a tramitación parlamentaria, rematará cristalizando na vixente Lei 2/2006 do 14 de Xuño.

A actual Lei do Dereito Civil de Galicia, amplía considerablemente a extensión da súa predecesora, a Lei do 24 de Maio de 1995, pasando de 170 a 308 artigos, repartidos nun título preliminar e dez títulos máis, que tratarían, respectivamente, da protección de menores, da adopción, da autotutela, da situación de ausencia non declarada, da casa e a veciña, dos dereitos reais, dos contratos, da compañía familiar galega, do réxime económico familiar e da sucesión por causa de morte. Completan a Lei catro disposicións adicionais, tres transitorias, unha disposición derogatoria e unha final.

Unha lectura rápida da Lei revélanos a primeira das súas características: ningunha das institucións reguladas na Lei de 1995 aparece aquí suprimida, malia as críticas, formuladas pola doutrina a algúns dos seus preceptos, de carácter meramente testemuñal, por regular figuras que aparecen como «meros vestixios do pasado», que non se acharían «acordes cos tempos que corren»<sup>5</sup>.

<sup>3</sup> Intervención de Sánchez Mera no acto de presentación do libro *Dereito de sucesións de Galicia*, publicada no Libro Homenaxe do Consello Xeral do Notariado do ano 2002.

<sup>4</sup> O que non obsta para que fosen invocados ante os tribunais de xustiza, nalgunha que outra ocasión, sen que estes atoparan reparos á súa aplicación, pois “ancha é Castilla”, *rectius*, Galicia.

<sup>5</sup> Cfr. Ramón P. RODRÍGUEZ MONTERO, «O dereito civil en Galicia. A lei dereito civil de Galicia e o futuro dereito civil de Galicia: apuntamentos, ideas y suxestións», *Anuario da Facultade de Dereito da Universidade da Coruña*, Fascículo nº 5-2001.

Poderase alegar a favor da conservación das devanditas institucións, o feito de que o Tribunal Superior de Xustiza, ao longo destes anos, non foi absolutamente alleo a estas figuras, invocando, en ocasións, os preceptos que as regulan. Con todo, non me parece que sexa un argumento definitivo, e neste mesmo sentido cabería alegar que, quen queira buscar xurisprudencia sobre a enfiteusis, os foros ou o dereito ás primeiras cepas, podería atopala sen problemas, e non obstante o Código Civil podería perfectamente simplificar a regulación que lles dedica, sen que nada pasase. Pénsese por exemplo na supresión do testamento sacramental e algunhas outras institucións, por parte do Código de sucesións de Cataluña en 1991, figuras cunha longa tradición no pasado, pero hoxe en día afastadas da realidade cotiá.

En canto ás institucións reguladas ex novo, a Lei ocúpase nos seus títulos I, II e III, da protección de menores, a adopción e a autotutela, respectivamente; figurades todas elas que constitúen unha novidade con respecto á Lei de 1995. A lectura destes preceptos debe facerse máis en clave política, que na propiamente técnico-xurídica, habida conta de que a regulación contida neles a penas introduce diferenzas con respecto ao Dereito Común. O verdadeiramente novidoso dos títulos citados, que era sen dúbida a regulación da autotutela que o Proxecto aprobado no ano 2001, contemplaba en termos similares aos do Dereito Catalán, finalmente non sería tal, ao adiantarse á súa aprobación a Lei 41/2003 do 18 de novembro, que reformaría o Código Civil. A devandita Lei veu a regular expresamente a figura da autotutela en Dereito Común, privando en gran parte de sentido á regulación da Lei galega. A pesar diso, ao seguir adiante a tramitación do Proxecto de Lei sen retocar os preceptos que se dedicaban a esta materia, atopámonos có paradoxo de que en Galicia non existe unha regulación específica da tutela, aínda que si da autotutela, que por outro lado nada achega con respecto ao Código Civil.

Á marxe do acerto dos artigos que se incorporan ao texto legal, a regulación de materias antes non contempladas, pode encadrarse na aspiración de gozar dun dereito privado propio de Galicia, con vocación expansiva, que evite ter que operar cunha dualidade de textos legais. De calquera modo, como adoita acontecer, a regulación de novas materias por parte das Comunidades Autónomas con Dereito Civil Foral ou Especial, suscita a dúbida da súa constitucionalidade, ao ser confrontadas cos límites antes citados do artigo 149.1.8º do texto do 78, segundo a interpretación que veu efectuando o Tribunal Constitucional. No caso dos preceptos que comentamos, o desexo de evitar o recurso de inconstitucionalidade, motivaría que se constituíse, ao amparo do artigo 33.2 da O 3/1979 do Tribunal Constitucional, a Comisión Bilateral de Cooperación Administración Xeral do Estado-Comunidade Autónoma de Galicia, a cal na súa reunión celebrada o día 18 de setembro de 2006, adoptaría o acordo de iniciar negociacións para resolver as discrepancias que, sobre os artigos relativos á adopción e a autotutela, se puxeran de manifesto entre ambas as dúas administracións<sup>6</sup>.

En canto ás institucións que xa figuraban reguladas na lei de 1995, a nova lei ocupouse de depurar algúns dos erros máis evidentes que se puxeran de manifesto, como a incomprendible repetición dos artigos 134 e 135 (idénticos aos artigos 155 e 156), ou a desacetada situación sistemática de determinadas figuras.

Ao mesmo tempo a lei veu a ampliar e aclarar a regulación da súa predecesora, especialmente nas materias máis necesitadas diso, a saber, aquelas nas que a regulación, por ser diferente á do Dereito Común, non pode integrarse acudindo aos preceptos do

<sup>6</sup> Resolución do 19 de Setembro de 2006, publicada no *BOE* o 27 de Setembro de 2006.

Código Civil. Neste sentido son moitos os aspectos que merecerían ser analizados (p.ej. a máis coidada regulación da ausencia non declarada, as serventías, o vitalicio<sup>7</sup>, a liquidación parcial da sociedade conxugal ou os pactos sucesorios), algo do que sen dúbida se encargará tanto a Xurisprudencia —pois os tribunais xa veñen aplicando a lei dende o pasado 19 de Xullo— como a Doutrina —cónstame a existencia de iniciativas neste sentido—.

Paga a pena deterse en, polo menos, tres aspectos novidosos da Lei 2/2006, que chaman poderosamente a atención polo cambio radical que introducen fronte á situación anterior á mesma.

En primeiro lugar, os artigos que nos atopamos ao comezar a ler a lei, no seu título preliminar, póñennos sobre aviso da vontade reformadora do lexislador, ao abandonar a primacía do costume fronte ao dereito positivo, que tradicionalmente caracterizara ao Dereito Foral de Galicia. Sen deixar de recoñecer a orixe eminentemente consuetudinaria da maioría das institucións do noso Dereito Foral, un dereito que mire cara ao futuro debe abandonar a dependencia do costume, que require da proba como presuposto previo á súa aplicación. A Lei do 14 de Xuño, na redacción dada ao título preliminar, que ten a súa orixe nunha emenda do Grupo Parlamentario Socialista, viño a facerse eco das críticas que formulara a doutrina, reestruturando o sistema de fontes, o que sen dúbida é un acerto dende o punto de vista da Seguridade Xurídica, permitindo ademais *“darlle ao Parlamento de Galicia todo o protagonismo de creación normativa, como órgano no que reside a potestade lexislativa como expresión da vontade do pobo”*<sup>8</sup>.

A segunda grande innovación da Lei sitúase no campo do Dereito Sucesorio, e é sen dúbida a reforma do sistema de lexítimas. Novamente a lei recolle sentir maioritario da Doutrina moderna, plasmado tamén noutras leis forais recentes<sup>9</sup>, que defendeu a redución a contía legitimaria e a correlativa ampliación do ámbito de dispoñibilidade do testador, fronte ás ataduras da tradicional lexítima *“pars bonorum”*, de dúas terceiras partes da herdanza, que o Código Civil recoñece os descendentes.

A regulación de 1995, se ben configuraba a lexítima de modo pouco claro<sup>10</sup>, evidenciaba xa o desexo de potenciar a liberdade dispositiva, ao regular as apartacións, o usufruto voluntario de viuvez ou a posibilidade de pagar a lexítima de ambos os dous cónxuxes cos bens dun só deles.

A lei actual vai máis alá, ao modificar, tanto a contía da lexítima como a súa natureza. En canto á súa contía, o artigo 243 a fixa na cuarta parte do valor do haber hereditario líquido, respecto dos descendentes, mentres que o artigo 253, en relación co cónxuxe viúvo, lle atribúe este *“o usufruto vitalicio dunha cuarta parte do haber hereditario”*. Non serán legitimarios, en diante, os ascendentes. Isto último contrasta, non obstante, co chamamento abintestato dos devanditos ascendentes, en defecto de ascendentes e con preferencia ao cónxuxe viúvo. Trátase dunha contradición froito do emprego do sistema de remisión ao Código Civil, nos preceptos que contemplan a sucesión intestada.

<sup>7</sup> Regulación esta última, por certo, na que a Lei de 1995 se adiantou ao lexislador estatal, que actualmente contempla esta figura, baixo o epígrafe *“do contrato de alimentos”*, nos artigos 1791 e ss. do Código Civil na redacción dada pola Lei 41/2003.

<sup>8</sup> Redacción proposta polo G.P. Socialista, na súa emenda nº 81, para o parágrafo IV da e. de M., que finalmente non sería aprobada.

<sup>9</sup> Vid, neste sentido, a Lei 1/1999, do 24 de febreiro, de Sucesións por causa de Morte de Aragón.

<sup>10</sup> O antigo artigo 146 definíaa como *«a cota de activo líquido que necesariamente corresponde a determinados parentes do causante dunha sucesión e ao cónxuxe viúvo deste, salvo nos casos de apartación regulados nesta Lei»*.

A consecuencia de todo iso será que, a pesar de que o cónxuxe viúvo do falecido é legitimario e os seus pais non o son, no caso de que aquel morrese sen realizar testamento, a posición que ocuparán os seus pais na herdanza, será de mellor condición que a daquel que contribuíu cos seus ingresos á adquisición do que, na maioría dos casos será o principal activo hereditario: a vivenda habitual. Por outro lado, o abandono do tradicional sistema de lexítima de dous terzos, fai que desapareza en Galicia o “terzo de mellora”, por máis que a lei siga falando agora de “pactos de mellora” ou de “mellora de labrar e posuír”, aínda que reducidos a meros pactos sucesorios (tal e como suxire a súa actual situación sistemática), formulándose a dúbida de se caberá, ao amparo destes artigos “mellorar”, aos descendentes de grao ulterior, cando non sexan legitimarios.

Pero a modificación do réxime de lexítimas non se limita, como sinalabamos antes, á mera redución da súa contía, senón que é máis fonda, ao afectar á propia natureza da figura. Na actual lei galega, o legitimario pasa a ser un mero acredor do herdeiro, que non ten acción real para reclamar o seu lexítima (art.249) senón tan só o dereito a recibir do causante, por calquera título, unha atribución patrimonial, na forma e medida que establece a lei (art.240).

A consecuencia inmediata que se desprende dos artigos citados, que comezamos a notar xa nos despachos notariais, sería a dunha maior axilidade, evitando a situación de bloqueo que se producía no sistema anterior cando un dos legitimarios negabase a asinar a partición da herdanza. O incremento das facultades dispositivas do testador, confire unha importancia decisiva ao testamento, no que o testador atopa agora máis doado deixar aos seus o que realmente quere, e non o que a lei anterior o obrigaba a deixar. Deste modo vai abríndose camiño o tradicional testamento “*d'un per a l'altre*” do dereito catalán. Con todo, urxe unha modificación do Imposto de Sucesións, que complete a reforma operada no Dereito Substantivo, equiparando a Galicia coas outras comunidades autónomas.

En terceiro e último lugar, é obrigada a mención á disposición adicional terceira da Lei, que a día de hoxe é, sen dúbida, a súa norma máis polémica.

Sinala esta disposición que *«aos efectos de aplicación da presente lei se equiparan ao matrimonio as relacións maritais mantidas con intención ou vocación de permanencia, co cal se estenden, polo tanto, aos membros da parella os dereitos e obrigas que esta lei recoñece aos cónxuxes.*

*Terá a consideración de relación marital análoga ao matrimonio a formada por dúas persoas que leven convivindo polo menos un ano, podéndose acreditar tal circunstancia por medio da inscrición no rexistro, manifestación expresa mediante acta de notoriedade ou calquera outro medio admisible en dereito. En caso de ter fillos en común será suficiente con acreditar a convivencia».*

Para comprender a norma, tal vez sexa preciso facer referencia ao seu proceso de xestión. O texto aprobado pola Comisión superior para o estudo do desenvolvemento do dereito galego, en Abril de 2001, non incluía no seu articulado, mención ningunha ás unións de feito. O Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego, na anterior lexislatura, cando atopábase na oposición, chegou a presentar unha proposición de lei sobre as unións de feito en Galicia, admitida a trámite pola mesa do Parlamento, o 10 de Xuño de 2002, aínda que finalmente a iniciativa non prosperaría<sup>11</sup>.

<sup>11</sup> Publicada no DOGA do 15 de Xuño de 2002.



As primeiras referencias ás unións de feito atopámolas nas emendas presentadas á Proposición de lei polos tres principais partidos con representación parlamentaria. As tres opcións de regulación, non eran non obstante coincidentes. Así, mentres que os socialistas propoñían a súa regulación dentro do articulado, mediante a introdución dun artigo 51 bis, nun capítulo novo, dedicado á familia, o Bloque Nacionalista Galego optaba por facer referencia expreso ás parellas de feito naqueles preceptos nos que se aludía aos cónxuxes, ao tempo que, como alternativa ao anterior, propoñía unha norma xeral de equiparación ao matrimonio, en sede de disposicións adicionais. Esta última era tamén a técnica proposta polo Grupo Parlamentario Popular, que na súa emenda<sup>12</sup> contemplaba a extensión dos dereitos e obrigas dos cónxuxes aos membros da parellas de feito, mediante a introdución dunha disposición adicional terceira, aínda que coa importante matización de que deberían figurar inscritas no correspondente rexistro, a creación do cal se propoñía no apartado segundo da mesma disposición. Finalmente, o partido popular retiraría a súa emenda por congruencia coa presentada polo Bloque Nacionalista, polo que as unións de feito quedarían reguladas na actual disposición adicional terceira, que reproduce case literalmente a proposta deste último partido. Deste xeito triunfaría a menos técnica das tres normas propostas, un precepto que formula máis dúbidas das que resolve, e que non ten parangón en ningunha das lexislacións autonómicas existentes.

A equiparación plena entre unións de feito e matrimonio, que podía ter certa xustificación no suposto das unións homosexuais, cando estas non podían ter acceso ao matrimonio, na actualidade, tras a reforma do Código Civil operada pola Lei 13/2005, do 1 de xullo, perdeu grande parte do seu significado. Esta equiparación, na práctica, implica estender os efectos do matrimonio aos que libre e voluntariamente decidiron non someterse ao seu réxime. Mentres que na situación precedente, aqueles que convivindo como parella de feito desexaban participar dalgún dos efectos do matrimonio, podían plasmar a súa vontade nun convenio regulador, agora en cambio, veranse obrigados a outorgar capitulacións todos aqueles que desexen escapar dos devanditos efectos.

Agora ben, independentemente do maior ou menor acerto ou oportunidade da norma, o certo é que os galegos temos que convivir con ela, de aí que nos formulemos os dous presupostos de que se fai depender a súa aplicación: que se entende por parella de feito na lei vixente, e cáles son os supostos nos que opera a equiparación, ou dito doutro xeito, como debe entenderse a expresión “aos efectos de aplicación da presente lei”.

En canto á primeira cuestión, a lei establece as tres notas que caracterizan as unións de feito:

1º.- A intención ou vocación de permanencia.

2º.- A existencia de dúas persoas (evidentemente calquera que fose o seu sexo<sup>13</sup>).

3º.- A convivencia durante polo menos un ano, salvo que existise descendencia en común, en cuxo caso abonda coa mera convivencia, sen prazo.

Pásase por alto, non obstante, unha cuestión transcendental, como é a de saber se poderán constituír parellas de feito, os que estean afectados polos impedimentos para contraer matrimonio. A omisión é máis notoria, se cabe, por canto que se trata dunha cuestión que non era allea ao Proxecto de Lei do 2002 nin á emenda presentada polo Partido Popular. En calquera caso, isto último pode revelarnos a intención do lexislador.

<sup>12</sup> A única presentada por este partido á lei.

<sup>13</sup> Vid D.AD. 4ª

Á mesma solución condúcenos unha interpretación teleolóxica da norma, que trate de evitar aqueles resultados absurdos, como acontecería se se permite que unha persoa unida por un vínculo matrimonial, pase a formar parella de feito —equiparada ex lege ao matrimonio— con outra, o que practicamente sería abrir a porta á bigamia.

En definitiva, a equiparación das unións de feito ao matrimonio opera aquí en sentido inverso, de modo que onde non pode haber matrimonio, non pode tampouco haber equiparación dos seus efectos, ou dito doutro xeito, unha suposta parella de feito non pode participar dos efectos do matrimonio, cando este, como tal, non pode chegar a nacer por existir un impedimento matrimonial.

Pode que por este camiño atopáramos as que na actualidade serían as verdadeiras parellas de feito: as que non reúnen os requisitos para que se lles aplique a norma da disposición adicional terceira (p.ej., as que levan convivindo menos dun ano, ou aquelas nas que un dos membros da parella está separado de feito, ou mesmo xudicialmente); só nestes casos, a opción dos convivientes de manterse á marxe do dereito matrimonial será respectada, en todos os demais a expresión parella “de feito”, non lles fará xustiza.

En canto á segunda cuestión que antes formulabamos, os supostos en que opera a equiparación, hai que aclarar que a expresión “Aos efectos de aplicación da presente lei”, restrinxe o ámbito da norma comentada pois sabido é que a Lei 2/2006, ademais de cingirse ao ámbito do dereito civil, non é un texto completo nin autónomo, senón que se limita a regular aquelas materias nas que existirían peculiaridades dentro do noso Dereito Foral. A dúbida suscítase nas materias non reguladas expresamente na lei pero si mencionadas nela, que se remite en canto á súa regulación ao Código Civil.

O caso paradigmático é o do réxime económico “matrimonial” das unións de feito. A lei galega non regula expresamente os réximes económico matrimoniais, se ben determina no seu artigo 171 que o réxime legal supletorio, en defecto de pacto dos “cónxuxes”, será a sociedade de gananciais ¿significa isto que as unións de feito en Galicia estarán suxeitas a gananciais? O certo é que o tenor literal da lei non dá moitas opcións para soste-lo contrario.

Na práctica, unha vez máis, o aconsellable será a clarificación da situación patrimonial da parella, por vía capitular, para poder saír desta “lea” en que nos meteu a lei.

A xeito de conclusión, debo sinalar que esta lei 2/2006, de DEREITO CIVIL DE GALICIA, que todos os notarios galegos temos sobre a mesa dos nosos despachos, dende que se publicase no *DOGA* o día 29 de Xuño de 2006, é na actualidade obxecto de estudos e debates, que sinalarán as pautas da súa aplicación nos anos vindeiros, enchéndose de glosas, notas marxinais e subliñados. Por todo iso, é de agradecer que a revista *LA NOTARÍA* lembrárase de nós, poñendo á nosa disposición este instrumento, que a todos os que, sen desdeñar as vantaxes das bases de datos, gustamos de comentar o precepto co cliente “a pé de campo” seranos de grande utilidade.

A Coruña, Decembro de 2006  
Gonzalo FREIRE BARRAL